

nos venimos refiriendo, en los preceptos legales a que me he referido no se estableció el procedimiento adecuado para hacer efectiva estas funciones en la Zona Libre de Colón. Fue por esta razón que el Director General de Aduanas profirió la Resolución N° 704-04-027 de 1° de agosto de 1988, cuya declaratoria de inconstitucionalidad ha pedido el demandante, a través de la cual se estableció "el procedimiento para las deficiencias de inventarios de mercancías y materias primas que se encuentran en los depósitos de áreas segregadas de Zona Libre".

Estimo que si en la Ley y en el Decreto Ejecutivo mencionados se omitió establecer el procedimiento para el control y fiscalización de los inventarios, dicha omisión únicamente podía ser subsanada por el propio Órgano Ejecutivo mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, opinión que comparte el señor Procurador General de la Nación. Esto es así porque el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Nacional y el artículo 45 del Decreto Ley N° 18 de 17 de junio de 1948 confieren privativamente esa facultad al citado Órgano del Estado y, más específicamente, al Presidente de la República con la participación del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Como al dictar la Resolución que en la presente demanda se acusa de inconstitucional, la Dirección General de Aduanas invadió el ámbito de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, infringió el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Nacional, y aunque por motivos diferentes a los alegados por el demandante, debió declararse la inconstitucionalidad pedida.

Fecha ut Supra.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA  
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.  
Secretario General

==XX==XX==XX==XX==XX==XX==XX==XX==

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF CONTRA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **Mariblanca Staff Wilson**, actuando en su propio nombre, ha instaurado acción constitucional a fin de que el Pleno de la Corte de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 1° del artículo 203 de la Constitución Nacional, declare que es inconstitucional el segundo párrafo del artículo 884 del Código Administrativo, cuyo texto es el siguiente:

"...

**Los ministros de los cultos admitidos en la Nación los ancianos valetudinarios y las mujeres honestas podrán sufrir el arresto en casas particulares siempre que den fianza de guardarlo fielmente."**

Una vez admitida la respectiva demanda de inconstitucionalidad, en este caso, se corrió en traslado al señor Procurador General de la Nación, quien al evacuar el mismo devolvió el expediente con Vista consultable a fojas 7-14.

Por devuelto entonces el expediente del despacho superior de la Procuraduría General de la Nación, el mismo se fijó en lista para que el demandante y todas las personas interesadas presentaran argumentos por escrito sobre el caso, pero ninguna lo hizo dejando vencer así el respectivo término de lista.

El caso se encuentra, por tanto, en estado de que el Pleno de la Corte decida sobre el fondo de la inconstitucionalidad demandada, por lo que a ello se procede previo el examen de la confrontación constitucional ordenada por la ley procedimental. Veamos:

## SÍNTESIS SOBRE EL CONTENIDO DE LA DEMANDA

La accionante pretende según la demanda instaurada, y como se tiene inicialmente señalado, que el Pleno de la Corte declare que es inconstitucional el segundo párrafo del artículo 884 del Código Administrativo.

El vicio de inconstitucionalidad lo funda en la violación de los artículos 19 y 20 del Estatuto Fundamental, habida cuenta de que a su juicio el impugnado párrafo al artículo 884 del Código en cita, en cuanto a la violación del artículo 19 constitucional crea **"un privilegio en favor de determinadas personas y además discrimina a las mujeres, ya que subjetivamente se está conceptualizando un determinado tipo de mujer, situación que atenta contra el principio de la no discriminación e igualdad de todos los seres humanos ante la ley"**.

Y, en lo que respecta también a la alegada infracción del artículo 20 ibídem, establece una desigualdad jurídica en perjuicio de las mujeres que por decisión arbitraria y subjetiva de un tribunal no reúnan la calidad que exige el párrafo segundo de la norma acusada, infringiendo el principio constitucional y universal de igualdad de todos los seres humanos ante la ley.

De esa manera la accionante arriba a la conclusión de que la acusada frase del artículo 884 del Código Administrativo es inconstitucional.

## OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El señor Procurador General de la Nación en la mencionada vista de traslado, al referirse a la supuesta violación del artículo 19 de la Carta Fundamental sostiene que la jurisprudencia nacional ha sido uniforme y constante al declarar que la violación de la citada norma constitucional, sólo se produce cuando como consecuencia de algunas de las circunstancias previstas en la disposición, se crea algún poder o prerrogativa a favor de determinada persona con lo cual se rompe la igualdad ante la ley de los integrantes de la comunidad.

En ese sentido arguye, que el Pleno de esta Corporación en sentencia de 11 de enero de 1991, expresó que el comentado artículo constitucional **"sólo prohíbe los fueros y privilegios de carácter personal"**, y al respecto opina:

"...

El transcrito artículo sólo prohíbe los fueros y privilegios cuando son personales, es decir, concedidos a título personal. De ahí que si la ley confiere ciertos fueros o privilegios a determinada categoría de ciudadanos, o de servidores públicos o de trabajadores, dichos fueros o privilegios no son inconstitucionales porque no han sido otorgados en atención a las personas en sí, sino a la condición o status que tienen. Por tanto, no ve la Corte que el cuestionado numeral del Artículo 2508 del Código Judicial infrinja esta parte del artículo 19 de la Constitución, toda vez que no atribuye fueros ni privilegios personales." (Corte Suprema de Justicia, Pleno, 11 de enero de 1991).

Somos de la opinión, entonces de que la disposición atacada no es contraria al Artículo 19 de la Constitución Nacional, toda vez que no otorga fuero o privilegio personal alguno, sino que establece, por la condición especial en que se encuentran ciertas personas que, previo cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, cumplan la sanción correspondiente, (arresto en este caso) en casas particulares.

Por su parte, el contenido de la disposición que se cuestiona no es única ni ajena al sistema jurídico vigente.

Así tenemos que el Artículo 77 del Código Penal, confiere a los tribunales, la facultad de suspender condicionalmente, de oficio, o a petición de parte, la ejecución de la pena cuya duración no exceda de 2 años de prisión, y el Artículo 78 de la misma excerta legal señala:

"ARTÍCULO 78. Serán condiciones indispensables para suspender la ejecución de la pena:

1. Que el reo haya observado antes de la comisión del hecho punible, una vida ejemplar de trabajo y cumplimiento de sus deberes y que con posterioridad al acto delictivo haya demostrado arrepentimiento;
2. Que se trate de delincuente primario;
3. Que se comprometa a hacer efectiva la responsabilidad civil, si se le hubiere condenado a ello, en un término prudencial que el Tribunal señalará, a menos que causas justificadas le impidan cumplir dicha obligación.

Para que proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los delitos contra el honor, será necesario que el reo haya cumplido con la indemnización civil a la que se le haya condenado.

Para los efectos de esta ley se entiende con, o calumnia, la imputación falsa a otro de un delito y por injuria, la expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona".

Por lo expuesto, somos de la opinión que la solicitud de la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto cuestionado, en relación con el Artículo 19 de la Carta Política, carece de fundamento".

De igual manera el Procurador General al opinar, también sobre la alegada infracción del artículo 20 de la Constitución y manifestarse contrario al criterio de la demandante sostiene:

"2. Sobre la supuesta violación del Artículo 20 de la Constitución Nacional.

El Artículo 20 de nuestra norma fundamental consagra el principio de la igualdad ante la Ley, íntimamente vinculado con el Artículo 19 ibídem, al que ya nos referimos, pues establece la obligatoriedad, tanto a nivel de disposiciones legales como de autoridades públicas de otorgar un trato igualitario a todas las personas.

El Dr. César Quintero es de la opinión que el principio de igualdad ante la ley consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros, en iguales circunstancias. (Cfr. Quintero, César. Derecho Constitucional, Tomo I, Ed. Imprenta Antonio Lehman, San José, Costa Rica, 1967, pág. 142).

Hemos señalado con anterioridad que el cumplimiento de una sanción en casa (sic) particular, cuando se trata de cierta calidad de personas, que se encuentran en circunstancias especiales, por ejemplo, ancianos valetudinarios, también consagrado en nuestro Código Penal y Judicial, en este último caso, cuando se trata de medidas cautelares, no es contrario al principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional.

Sería contrario al principio de igualdad, si a dos personas (ancianos valetudinarios, por ejemplo) bajo las mismas condiciones y circunstancias, se les diera un trato distinto o preferencial a uno ignorando los derechos que le son propios al otro."

De esa forma concluye en la comentada Vista opinando que **"... el segundo párrafo del Artículo 884 del Código Administrativo no es contrario a los Artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional, ni a ningún otro precepto constitucional"**.

#### DECISIÓN DE LA CORTE

El Pleno de la Corte, luego de analizar las posiciones contrarias expuestas

tanto por la accionante como por el señor Procurador General de la Nación, en relación con las acusadas frases del artículo 884 del Código Administrativo, comparte la opinión vertida en este caso por el máximo representante del Ministerio Público, en el sentido de que **"el segundo párrafo del artículo 884 del Código Administrativo no es contrario a los Artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional, ni a ningún otro precepto de la Constitución"**.

En orden a lo expuesto cabe señalar, que ciertamente como sostiene el Procurador General, el Pleno de la Corte se ha pronunciado sobre la finalidad y alcance del Artículo 19 de la Carta Fundamental, sentando al respecto que dicha norma constitucional sólo prohíbe los fueros y privilegios cuando son personales, o sea otorgados o reconocidos a título personal.

Además, también es cierta la indicación de que la medida adoptada por el legislador en las acusadas frases del citado artículo del Código Administrativo, no es única ni novedosa en nuestro ordenamiento jurídico positivo penal, el cual, inclusive, tratándose de pena de prisión, y no de arresto como en este caso, bajo ciertas condiciones y obligaciones que debe cumplir el beneficiario, contempla en su normativa la suspensión provisional de la pena.

No existe, pues, la alegada colisión de la acusada frase del artículo 884 del Código Administrativo, con la prohibición contemplada en el texto de la norma constitucional confrontada.

En cuanto a la infracción del Artículo 20 de la Constitución Nacional, el Pleno de la Corte tampoco considera que la comentada frase objeto del presente proceso de constitucionalidad, resulta contraria al principio de la igualdad ante la ley consagrado en la precitada norma de rango constitucional; pues, oportuno resulta reiterar lo que la Corte dijo en fallo de 27 de febrero de 1975, publicado en la **"Jurisprudencia Constitucional, Universidad de Panamá, Centro de Investigaciones Jurídicas (Recensiones a los fallos sobre inconstitucionalidad dictados por la Corte Suprema de Justicia desde 1966 hasta 1977) Tomo 11, 1979, pág. 512"**, sobre el alcance del mencionado principio constitucional.

En efecto, esta Corporación en el aludido fallo se pronunció así:  
"...

Debe decirse que el artículo 21 de la Constitución anterior que comprendía el principio de igualdad ante la Ley, en la Constitución actual se encuentra desglosado en los artículos 19 y 20, y el propiamente de igualdad ante la ley en el segundo."

"De esta explicación, que serán útiles algunos precedentes que integran la doctrina jurisprudencial creada por la Corte Suprema de Justicia en la interpretación del artículo 21 de la Constitución de 1946, que mantiene el mismo principio del artículo 20 de la actual."

"Por ejemplo: en el fallo de 16 de marzo de 1948 se dejó expresado que el principio de igualdad ante la ley no es una norma absoluta sino que está subordinada a las necesidades sociales. Significa igualdad de oportunidades bajo circunstancias iguales."

"... el principio de igualdad ante la ley, opera en un ámbito de efectos relativos por encontrarse sujeto a la desigualdad que entraña el interés jurídico de las partes en el proceso." ..."

A juicio del Pleno de la Corte queda claro, en consecuencia, que la impugnada frase a que alude la norma del Código Administrativo, contrario a los argumentos esgrimidos, en este caso, por la demandante, no infringe el artículo 20 de la Constitución Nacional, razón por la cual el cargo tampoco prospera.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que la segunda frase del artículo 884 del Código Administrativo que expresa: "los ministros de los cultos admitidos en la Nación, los ancianos valetudinarios y las mujeres honestas, podrán sufrir el arresto en casas particulares siempre que den fianza de guardarlo fielmente", no viola los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional,

ni otros de la misma Carta Política, y por ende no deviene en inconstitucional.

Notifíquese, Archívese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario

==xx==xx==xx==xx==xx==xx==xx==xx==xx=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LUIS A. BANQUÉ MORELOS CONTRA EL DECRETO N° 49 DEL 10 DE MAYO DE 1994 POR EL TRIBUNAL ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **LUIS A. BANQUÉ MORELOS** interpuso demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 49 de 10 de mayo de 1994, expedido por el Tribunal Electoral y publicado en el Boletín Electoral, Edición Oficial, N° 814 del 11 de mayo de 1994.

Admitida la demanda se corrió en traslado al señor Procurador General de la Nación para que emitiera concepto de conformidad con el mandato establecido en la Constitución Nacional y la Ley reglamentaria.

Por devuelto el expediente del despacho superior de la Procuraduría General de la Nación con Vista que corre a fojas 14 a 21, se fijó en lista para que el demandante y todas las personas interesadas presentaran argumentos por escrito sobre el caso; pero sólo el abogado Lcdo. Ricardo A. Sémpero presentó argumentos por escrito en que sostiene que el Decreto es **"extemporáneo e inconstitucional"**.

El proceso constitucional sometido al conocimiento del Pleno de la Corte se encuentra, por tanto, en estado de fallar, por lo que a ello se procede seguidamente:

#### EL ACTO IMPUGNADO

El demandante, como se tiene inicialmente, expresado pretende a través del libelo interpuesto, que el Pleno de la Corte en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 1° del Artículo 203 de la Constitución Nacional, declare inconstitucional el Decreto N° 49 de 10 de mayo de 1994, expedido por el Tribunal Electoral que reza así:

"Decreto N°49  
de 10 de mayo de 1994.

Los Magistrados del Tribunal Electoral en uso de sus facultades Legales y Constitucionales

#### CONSIDERANDO:

Que las Juntas de Escrutinio de los circuitos plurinominales están confrontando problemas para aplicar la fórmula de asignación proporcional de curules en la elección de legisladores debido a errores cometidos en las actas de mesa al computarle los votos a los partidos.

Que corresponde al Tribunal Electoral reglamentar privativamente la materia electoral para asegurar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.